

Estado de Sitio

Resistencia pacífica a Tahoe Resources y la militarización en Guatemala

Informe por Luis Solano

10 Noviembre, 2015





Investigación por Luis Solano.

Informe solicitado por la Plataforma Internacional contra la Impunidad y Alerta Minera Canadá.

Se llevó a cabo la investigación con la ayuda de la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), y pobladores y pobladoras de los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, Guatemala.

Fotos: NISGUA

Estado de Sitio

Resistencia pacífica a Tahoe Resources y la militarización en Guatemala

Informe por Luis Solano

10 Noviembre, 2015

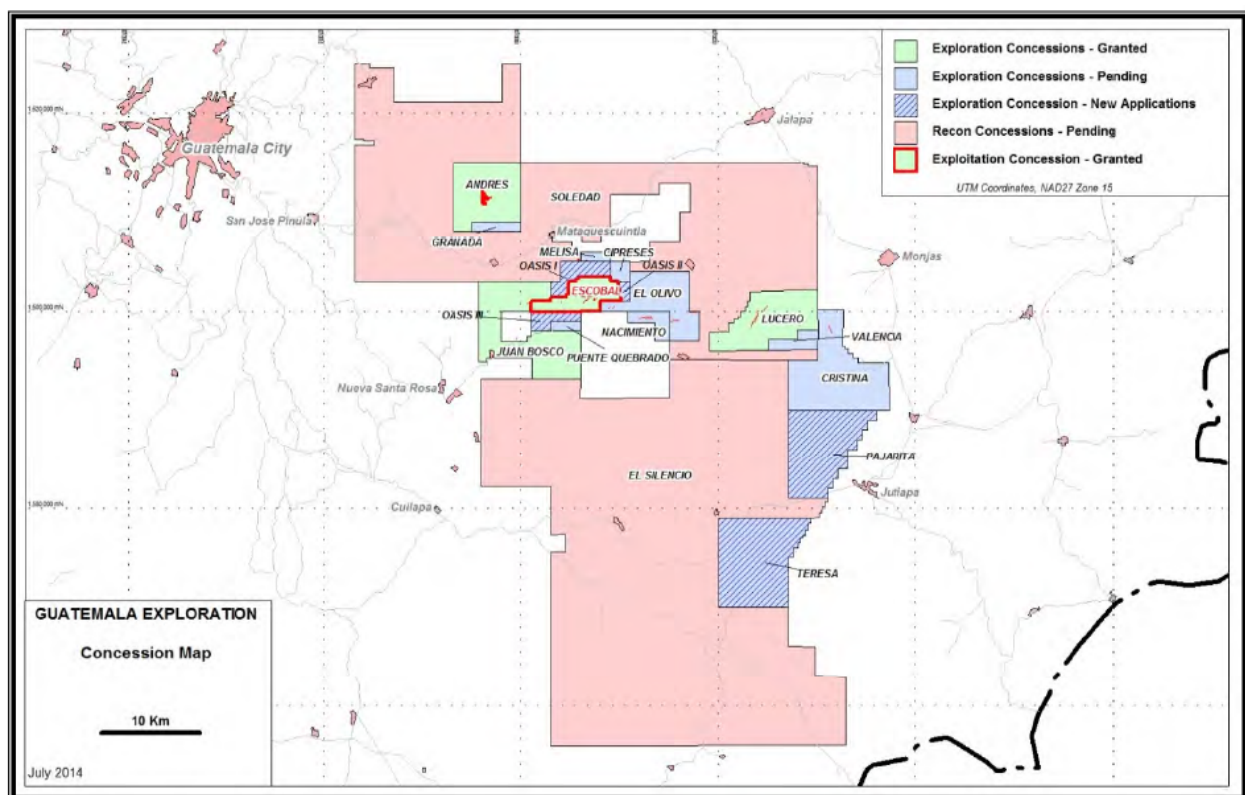
1. Caso proyecto minero Escobal.....	1
1.1 Contexto	2
1.1.2 Antecedentes mineros	2
1.1.3 Antecedentes de la minera Tahoe Resources	3
1.1.4 De las operaciones mineras a partir de 2006.....	4
2. Resistencia pacífica.....	6
2.1 Comité en Defensa de la Vida y por la Paz.....	6
2.2 CODIDENA (Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza)	7
3. Estudio de Impacto Ambiental (EIA)	8
4. Consultas municipales a solicitud de vecinos de municipios circunvecinos de San Rafael Las Flores	8
4.1 Relaciones de poder municipal, económico y político	10
5. Militarización	11
5.1 Empresas de seguridad privada.....	11
5.2 Robo de explosivos	13
5.3 El Estado de Sitio	15
5.4 Comisión Interinstitucional de Desarrollo Integral.....	15
5.5 Represión en San Rafael Las Flores	17
5.6 Declaración jurada de Vicepresidente de Tahoe Resources	18
5.7 Seguridad privada internacional de tipo contrainsurgente	20
5.8 Seguridad privada a cargo de Alberto Rotondo	21
5.9 Otras empresas de seguridad e instancias de inteligencia.....	22
5.10 Cambios en la seguridad privada de Minerasa.....	23
6.0 Consideraciones finales.....	24

1. Caso proyecto minero Escobal

La licencia minera Escobal se localiza en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la licencia tiene el registro LEXT-015-11, y fue autorizada finalmente el 3 de abril de 2013. Contiene oro, plata, níquel, cobalto, cromo, plomo, zinc, antimonio y tierras raras.

La licencia Escobal tiene actualmente una extensión de 19.99 km², equivalente a un quinto del territorio de San Rafael las Flores que mide 85 km². En sus orígenes de exploración se conoció como licencia minera Oasis, con una extensión de 50 km², la cual originalmente se otorgó a Entremares, S.A. una subsidiaria de la transnacional Glamis Gold que luego fue adquirida por la minera Goldcorp. Finalmente, el proyecto minero Escobal pasó a manos de la minera canadiense-estadounidense Tahoe Resources que lo opera por medio de su subsidiaria Minera San Rafael, S.A. (Minerasa). Esas empresas mineras le llamaron Escobal porque la parte núcleo de la licencia está localizada en el caserío Escobal del municipio de Mataquescuintla, departamento de Jalapa, aunque la mayor parte del territorio de la licencia está en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.

Si se toma en cuenta las licencias en trámite Oasis I, II y III que rodean la licencia Escobal, la extensión aumenta a 40 km², la mitad del territorio de San Rafael Las Flores, abarcando los municipios de San Rafael Las Flores y Casillas del departamento de Santa Rosa; y los municipios de Mataquescuintla y San Carlos Alzatate del departamento de Jalapa. La licencia Escobal hace parte de un proyecto minero mucho más grande, que pertenece a Tahoe Resources, que contiene varias licencias que se encuentran en trámite, en fase de exploración o explotación, localizadas en los departamentos de Guatemala, Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa con una extensión aproximada de 1290 km² (ver mapa).



Fuente: Tahoe Resources. Escobal Mine Guatemala. NI 43-101 Feasibility Study. November 5, 2014.

La licencia Escobal comenzó su fase de explotación en 2014, y tiene una duración de 25 años, aunque la empresa estima una duración de operaciones de aproximadamente 18 años. El derecho minero (regalía y cánones) que estaría pagando Minerasa por tonelada de mineral extraído al Estado guatemalteco será de 3.56 dólares, lo que significaría un total anual estimado de US\$4.97 millones, de los cuales la mitad le corresponde a la municipalidad de San Rafael Las Flores. En los 18 años de explotación el Estado de Guatemala estaría percibiendo US\$84 millones, mientras que Minerasa recibiría US\$12.4 mil millones (a precios de enero 2012).¹

1.1 Contexto

La actividad agrícola y ganadera es la base de la economía y desarrollo económico de los municipios en los que se localiza la licencia minera Escobal y todo el proyecto minero en cuestión. Los cultivos como la cebolla y el café son de los más importantes, al igual que la producción de lácteos, ganado de doble propósito, maíz y frijol. La migración de personas a Estados Unidos, desde los años 70, común para muchas regiones del país, evidencia que las remesas familiares han sido y seguirán siendo un pilar para la economía local.

1.1.2 Antecedentes mineros

A partir de 2006, esa área geográfica retomó un renovado interés por la exploración minera, una actividad que en realidad es de larga data. Las licencias mineras autorizadas a Tahoe Resources, cuentan con un historial que se resume a continuación.

El área de los municipios de Matasquescuintla, Jalapa y San Rafael Las Flores, Santa Rosa, ha sido de interés minero desde 1694, cuando se hicieron los primeros descubrimientos de plata, actualmente el mineral que se explota en la licencia Escobal.²

En 1850, la orden de los Jesuitas comenzó a explotar plata en la Mina Santiago y Mercedes, descubierta por ellos, ubicada en la aldea Morales, Mataquescuintla, muy cerca de San Rafael Las Flores. En 1871 concluyeron debido a que en 1872, a inicios de la Reforma Liberal (cafetalera), el gobierno de Justo Rufo Barrios expropió las propiedades a la Iglesia Católica.

Entre 1917 y 1918, las mineras estadounidenses West End Consolidated Mining Co. y Mataquescuintla Mining Co., exploraron las minas de plata y cobre El Rosario, Los Ocotes, Magdalena y San Francisco localizadas en lo que luego se conoció como la mina Mataquescuintla, en la aldea Morales. Ambas transnacionales operaban conjuntamente con la estadounidense Silver Lead Mining Co., la cual exploraba un área minera en el municipio de Sansare, El Progreso, cercana al proyecto minero actual.

La Mina Santiago y Mercedes, y la Mina Mataquescuintla, se encontraban en terrenos de El Rosario propiedad del ingeniero chileno Edward Wright Crowe Ebner, quien participó en su explotación. Los terrenos fueron obtenidos en 1925 cuando llegó a Guatemala para trabajar con las compañías estadounidense International Railways of Central America (IRCA) y, posteriormente, ayudar a desarrollar las plantaciones bananeras de United Fruit Company (UFCO) en Tiquisate, Escuintla. La familia Crowe permaneció como propietaria del área minera hasta 2013.

¹ Colectivo Madre Selva. Cuatros casos de gestión de seguridad ambiental y humana. Relacionados con la industria minera de metales en las cuencas de los Ríos Cuilco, Motagua, Los Esclavos, y Ostúa-Guija, en la República de Guatemala. Agosto 2015. 173 págs.

² <http://www.albedrio.org/htm/documentos/Solano-SanRafaellLasFlores.pdf>

A partir de 2007, el terrateniente Carlos Crowe Santis, nieto de Crowe Ebner, se desempeñó como Gerente de Relaciones Comunitarias de Tahoe Resources, en el área de ingeniería civil de la minera, y cargos similares en Montana Exploradora, subsidiaria de Goldcorp. El finquero Crowe Santis jugó un papel muy importante desde 2006, para convencer a la población a aceptar el proyecto minero que se desarrolla actualmente. Crowe Santis era dueño de la Finca Pedregal El Rosario hasta 2013, la cual vendió y al mismo tiempo dejó de laborar para Minerasa ante presiones de los comunitarios de la región.³ En su finca recibía protección de la seguridad privada de Minerasa. Crowe Santis fue muy importante para la entrada de Minerasa en Mataquescuintla, Jalapa, incluso fue mediador para tratar de convencer al alcalde Hugo Loy, de Mataquescuintla, para autorizar operaciones mineras, a lo cual el alcalde se opuso.

En la década de 1940 se constituyó la empresa guatemalteca Minerales Nacionales, S.A., para explotar la Mina Santiago y Mercedes, propiedad del cafetalero José Roberto Fanjul García. Sus representantes legales fueron los cafetaleros Arturo Bianchi Argüello y Fanjul García. En el caso de Fanjul García, fue Ministro de Economía durante el gobierno de Árbenz Guzmán. Un hijo suyo, Julio Roberto Fanjul Bianchi, actual gerente general y representante legal de Monolit (Grupo Multi Inversiones), tenía intereses mineros en azufre en la licencia minera Peñas Blancas, adyacente a San Rafael Las Flores, en la década de 1980. En el caso de Bianchi, fue el último representante legal de Minerales Nacionales, en la década de 1950. Familiares suyos fueron altos funcionarios del gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993).

En 1996, lo que hoy se conoce como licencia Escobal (rodeada por las licencias mineras Oasis I, II y III) y el proyecto minero Cerro Blanco, Jutiapa, se le otorgó a la minera Mar-West Aruba, subsidiaria de Mar-West Resources de Canadá, la cual constituyó a la subsidiaria Entre Mares, S.A. por medio de su presidente, el canadiense Simon Ridgway, para operar en Guatemala, el 26 de septiembre de 1996. En 1997, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó a Entre Mares las concesiones mineras Ayarza I, Pocito y Joya Grande también conocidas como Ayarza y Tapalapa localizadas en los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, donde hoy se encuentran las principales licencias mineras de Tahoe Resources.

En 1998, Glamis Gold adquirió a Mar-West Resources y todos los proyectos mineros incluyendo El Escobal y Cerro Blanco, y a Entre Mares, S.A.. Simon Ridgway se convirtió entonces en presidente de Radius Exploration la que hoy día se denomina Radius Gold, con varias licencias mineras de exploración de oro en Guatemala, México y Estados Unidos.

Glamis Gold también adquirió en 2002, a Montana Exploradora que había sido fundada por Montana Gold. En 2007, Goldcorp adquirió a Glamis Gold y todos sus activos mineros. Los correspondientes a Escobal, pasaron a manos de Tahoe Resources en 2010. En 2013, el MEM aprobó la licencia de explotación de Escobal.

1.1.3 Antecedentes de la minera Tahoe Resources

La compañía Tahoe Resources Inc. fue fundada por altos directivos de mineras canadienses, sobre todo de Glamis Gold y Goldcorp. Surgió a la palestra gracias al proyecto minero Escobal, en 2010, luego de una transacción con Goldcorp. Está registrada en Vancouver, Canadá, con oficinas en Vancouver y Nevada, Estados Unidos.

³ La finca fue vendida por Crowe entre finales de 2013 y principios de 2014, al entonces diputado del oficialista Partido Patriota (PP), Amildo Morales, originario de San Rafael Las Flores, quien falleció en octubre de 2014. Fue electo por el partido UCN, pero luego se cambió al PP. Tras su muerte, la finca quedó en manos de Amildo Morales (hijo), quien distribuye combustible a Minerasa por medio de gasolineras de su propiedad en la Aldea Sabana Redonda, San Rafael Las Flores.

<http://www.plazapublica.com.gt/content/no-puedo-decir-si-este-secuestro-fue-por-la-mina-o-fue-por-el-problema-con-las-tierras>

Una nota del periodista Jose Rubén Zamora, señala a Morales (hijo) de narcotraficante.

<http://www.contrapunto.com.sv/tribuna/ruta-del-piloto-del-polvo-blanco-que-no-es-harina>

Desde 1998, el Escobal había pertenecido a Glamis Gold. Posteriormente, en 2006, Glamis Gold fue adquirida por la transnacional canadiense Goldcorp la cual obtuvo todos sus activos mineros y empresas subsidiarias en Guatemala, tal el caso del proyecto Escobal y las empresas Entre Mares Guatemala, S.A. y Montana Exploradora, S.A..

Tahoe Resources fue incorporada en la Business Corporations Act de British Columbia, el 10 de noviembre de 2009, bajo el nombre de CKM Resources. El 13 de enero de 2010, la compañía cambió de nombre a Tahoe Resources Inc. Pocos meses después, el 3 de mayo de 2010, la minera entró en un acuerdo de compra del proyecto Escobal con Goldcorp, el cual se completó el 8 de junio de 2010.

Previamente, el 12 de febrero de 2010, Goldcorp comenzó la compra y legalización de tierras para el proyecto minero, por medio de las abogadas Daris y Dora Pivaral Pivaral, con oficina en San Rafael Las Flores. El 5 de abril de 2010, el abogado Jorge Asencio Aguirre inscribió a Minerasa en el Registro Mercantil de Guatemala. El 8 de junio de 2010, Tahoe Resources adquirió todo el proyecto minero y a Minerasa, pero el 40% de las acciones quedó en manos de Goldcorp. El actual director ejecutivo de Tahoe Resources, Kevin McArthur, fue presidente de Glamis Gold y de Goldcorp.⁴ Actualmente también se desempeña como asesor del Director Ejecutivo de Goldcorp.⁵ Hasta 2015, por tener los 40% de acciones, cada año Goldcorp nombraba tres directores a la junta directiva de Tahoe; de los ocho directores, seis tenían experiencia actual o previa con Goldcorp o su antecesor Glamis Gold. La fusión de Tahoe Resources con Rio Alto Mining, en abril de 2015, diluyó el porcentaje de acciones que tenía Goldcorp a 25% y cambió la conformación de la junta directiva, en la cual ahora cuatro de nueve directores tienen experiencia actual o previa con Goldcorp o su antecesor Glamis Gold. En junio de 2015, Goldcorp vendió todas sus acciones de Tahoe por aproximadamente 1 mil millones de dólares canadienses.

Asencio Aguirre es una piedra angular en todo este proceso. Es representante legal de las mineras Montana Exploradora (proyecto Marlin, San Marcos), Entre Mares, Explotaciones Mineras de Guatemala (Exmingua-Caso La Puya) y Minerasa y contribuyó a elaborar el proyecto de Ley de las reformas a la Ley de Minería de 1997, según él mismo lo indicó en el programa televisivo, Libre Encuentro.

1.1.4 De las operaciones mineras a partir de 2006

En 2006, Entre Mares inicia la fase de reconocimiento y descubre el yacimiento de minerales de lo que hoy se conoce como licencia Escobal. Se instalan las primeras oficinas de las empresas asociadas a Glamis Gold, entre ellas Entre Mares, y aparece publicidad de Glamis Gold. Para ese momento se observa poco personal de la minera.

El 15 de marzo de 2007, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprueba la licencia de exploración Oasis en resolución No. 044, otorgada para 50 km², con el registro LEXR-040-06.⁶ Ese año, Goldcorp adquiere a Glamis Gold y todos sus activos, empresas y licencias mineras en Guatemala.⁷

El proyecto Escobal, según la empresa minera, se estimó que albergaba “recursos de plata por 367.5 millones de onzas a 422 g/Tonelada grano medio y 36.7 millones de onzas a 254 gr/tonelada de grano medio. Se procesarán en promedio 3,500 toneladas por día de roca. Se estima producir alrededor de 20 mi-

⁴ <http://www.tahoeresources.com/tahoe-resources-announces-kevin-mcarthur-to-assume-ceo-role/>

⁵ <http://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=30269754&ticker=THO:CN>

⁶ MEM. Dirección General de Minería.

⁷ Una amplia cronología de las operaciones mineras se puede ver en: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). SAN RAFAEL LAS FLORES, ANTES Y DESPUES DE LA LICENCIA DE EXPLORACION OTORGADA A MINERA SAN RAFAEL. Autor: Óscar Roderico Morales García. Septiembre de 2013.

liones de onzas de plata por año, a un costo no mayor de USD 5.00”⁸.

En 2008 y 2009 Entre Mares, continúa su fase de exploración e inicia la compra de terrenos alrededor de su campamento base.

A finales de 2008, McArthur se retira como presidente de Goldcorp y, en 2009, McArthur forma la empresa que denomina Tahoe Resources, en ese momento inicia negociaciones con la empresa Goldcorp⁹.

El 27 de abril de 2010, mediante Resolución # 095, el MEM autoriza la primera prórroga a dicha licencia de exploración a la empresa Entre Mares, reduciendo de 50 a 40 Km² el área de exploración.

Con fecha 29 de abril de 2010, mediante Resolución # 098, el MEM autoriza el traslado de los derechos de la mencionada licencia de exploración a la empresa Minera San Rafael, S.A, constituida el 5 de abril de 2010. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aprobó el Diagnóstico Ambiental para dicho proyecto de exploración el 23 de diciembre de 2008, mediante resolución 4590-2008/ELER/CG y mediante la resolución 1918-2010/ECM/GB acepta el cambio de entidad propietaria del proyecto Exploración Minera Oasis¹⁰.

El 3 de mayo de 2010, Goldcorp, anuncia que tiene intenciones de vender su proyecto Escobal y que está en negociaciones con Tahoe Resources. Finalmente, Tahoe Resources adquiere el proyecto, pagando un valor de US\$505 millones, esta transacción es celebrada en Canadá en fecha 8 de junio de 2010. En esa negociación Goldcorp aún participa del 40% de las acciones de Tahoe Resources.

El 10 de febrero de 2011, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), otorga la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Túneles de Exploración Minera OASIS”, por medio de la resolución 262-2011/ECM/cam.¹¹

Para el 8 de junio de 2011, Tahoe Resources, anunciaba en su página web, que en su fase de perforación de pozos ha descubierto una vena mineralizada paralela a la vena Escobal, nombrada Margarito, la cual se une a las venas Areneras, Beto y Escobal.

En esa fecha, también Minerasa en su plan de expansión regional, hace público que está perforando para analizar otras zonas en la región; Proyecto Morales, al norte de Escobal, una mina que operó a finales de 1800 donde encuentran metales básicos, como cobre, plomo, zinc, plata. El proyecto San Nicolás a 13 km al Noreste de Escobal, y el proyecto Varejones al oriente de Escobal¹².

El 14 de Noviembre de 2011, Tahoe Resources, anunciaba en su página web, que el 21 de octubre de 2011, fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por parte del MARN, lo cual despeja el camino para la construcción de la planta, y así mismo se presenta la “solicitud de licencia de explotación Escobal” como requisito para iniciar la explotación en dicho proyecto. En esta publicación Tahoe Resources, reporta que al 30 de septiembre de 2011, el proyecto Escobal emplea 365 personas¹³.

En junio 28 de 2012, Tahoe Resources, anuncia que el gobierno de Guatemala, ha propuesto reformas a la ley de minería y que esto de ninguna manera afectará al proyecto Escobal, también consigna que una empresa minera estatal no es viable, y que nunca el gobierno se ha pronunciado para participar en las opera-

⁸ <http://www.tahoeresourcesinc.com/escobal/>

⁹ <http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/kevin-mcarthur-has-mining-in-his-blood/article1606820/page2/>

¹⁰ COLECTIVO MADRE SELVA, Informe de Revisión de Estudio de evaluación de impacto ambiental, Proyecto minero El Escobal, San Rafael las Flores, Santa Rosa, Guatemala. 2012. 36 págs.

¹¹ Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S.A, 2011. Estudio de evaluación de impacto ambiental proyecto minero Escobal. San Rafael las Flores, Santa Rosa, Guatemala junio 2011.

¹² <http://www.tahoeresourcesinc.com/tahoe-resources-updates-escobal-drilling-expands-known-mineralization/>

¹³ <http://www.tahoeresourcesinc.com/tahoe-drilling-further-expands/>

ciones de su proyecto Escobal.¹⁴

El 14 de noviembre de 2012, Tahoe Resources, anunciaba que la licencia de explotación esta próxima a ser aprobada, que se espera obtenerla a finales de 2012.

Sorpresivamente, el MEM, a través de la Dirección de Minería en fecha de 3 de abril de 2013, hace público que otorga la licencia de explotación Escobal a Minerasa, dicho evento es anunciado en la página web de Tahoe Resources, inmediatamente¹⁵. En esa misma fecha la Dirección de Minería, notificaba a 280 ciudadanos, que su recurso de oposición¹⁶ a la licencia de explotación Escobal, no sería conocida por carecer de afectación directa y personal.

En ese sentido, la licencia de explotación Escobal fue otorgada arbitrariamente por el director de Minería, Fernando Castellanos Barquín, quien asumió ese cargo en 2012, había trabajado para la empresa Kluane Guatemala, S.A., una de las empresas sub-contratadas por Minerasa. Castellanos Barquín notificó que las 280 oposiciones no se tomarían en cuenta en el expediente de la licencia Escobal. Debido a esta violación en el proceso administrativo se presentó una acción de amparo ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones la cual ordenó a la Dirección General de Minería (DGM) que le dé trámite a la acción de oposición presentada por Kelvin Otoniel Jimenez Villalta, asesor jurídico del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala (PAPXIGUA). De esa manera se dejó en suspenso la resolución del actual Director de Minería.¹⁷ Por aparte, Minerasa reportó en 2014 que inició exportación de metales preciosos desde San Rafael las Flores, irrespetando así el amparo en cuestión.¹⁸

El 24 de julio de 2013, Tahoe Resources, publicó en su página web, que la decisión de la Sala de Apelaciones, al dar con lugar el amparo en contra de la resolución de fecha 3 de abril 2013 de la Dirección de Minería no afecta al proyecto Escobal, ya que no invalida la licencia Escobal. Según Kevin McArthur, Director Ejecutivo de Tahoe Resources, “la legalidad de la licencia no está en cuestión y sigue siendo plenamente eficaz”, MEM y la empresa están apelando la decisión de la Sala y se ha planteado esto ante la Corte de Constitucionalidad.¹⁹ A julio de 2015, dicha resolución aún se encuentra en la Corte de Constitucionalidad.

2. Resistencia pacífica

Desde que Goldcorp obtuvo los derechos mineros de Glamis Gold, en 2007, la inconformidad comenzó a aflorar entre pobladores de comunidades de Jalapa y Santa Rosa quienes empezaron a manifestar pacíficamente su oposición al proyecto minero. A partir de 2010, el proyecto minero bajo control de Tahoe Resources, experimenta la creciente oposición comunitaria con marchas de protestas hasta consultas municipales de vecinos de los municipios de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y Casillas. Paralelamente, varios hechos de violencia ocurrieron en el ínterin, denunciados por miembros de la resistencia pacífica como actos donde participó gente infiltrada por la minera.

2.1 Comité en Defensa de la Vida y por la Paz

Un dato relevante desde el inicio de las operaciones mineras es que las empresas subsidiarias de Glamis

¹⁴ <http://www.tahoeresourcesinc.com/escobal-project-unaaffected-by-proposed-mining-reform/>

¹⁵ <http://www.tahoeresourcesinc.com/tahoescobal-project-receives-final-permit/>

¹⁶ Recurso administrativo establecido en la ley de minería, para oponerse a una licencia de explotación.

¹⁷ Prensa Libre, 25 de julio de 2013. Sala ordena conocer oposición a minería. *elPeriódico*, 25 de julio de 2013. Pobladores ganan pulso legal a mina San Rafael.

¹⁸ <http://www.miningwatch.ca/news/guatemalan-complainants-celebrate-effective-suspension-tahoe-resources-licence>
<http://www.tahoeresourcesinc.com/tahoe-resources-clarifies-pea-disclosure/>

Gold, Goldcorp y Tahoe Resources nunca informaron a la población de todo lo relacionado con la actividad de la minería química de metales que proyectaban realizar en Jalapa y Santa Rosa. Si bien la ley es ambigua al respecto, y no obliga a las empresas a informar a las comunidades, sí resalta la fuerte publicidad y la promoción de temas de “desarrollo y progreso” derivados de la actividad extractiva, con el propósito de ganarse la llamada “licencia social” de la población, y contrarrestar de esa manera la férrea oposición comunitaria al proyecto extractivista.

Esa manera de actuar de las empresas mineras condujo, a finales de 2009, a que un grupo de vecinos de San Rafael Las Flores, interesados en el tema ambiental y ante los rumores del inicio de un proyecto minero, se reuniera para conocer sobre el asunto. En ese grupo había personas que vendieron sus tierras a la empresa minera, quienes se sentían engañados por no haber sido informados plenamente. En abril de 2010, los pobladores hacen contacto con la organización Colectivo Madre Selva (CMS).²⁰

En esa reunión con un pequeño grupo de agricultores de San Rafael Las Flores, CMS proporcionó información sobre los impactos ambientales y sociales de la minería de metales, y sobre los planes de la transnacional canadiense Gold Corp de establecer el proyecto Escobal, conocido en esos días como Oasis. A partir de ese momento se funda el Comité en Defensa por la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores, con participación de la Iglesia Católica local, mujeres y agricultores. A finales de noviembre 2010 se iniciaron las actividades de sensibilización en los municipios de Casillas, Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima.

En diciembre 2010, el Obispo Bernabé Sagastume decidió la creación de la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza (CODIDENA), a partir de una reunión de la diócesis de Santa Rosa realizada en Chiquimulilla, en la que el Colectivo Madre Selva y la Comisión de Paz y Ecología de San Marcos (COPA) presentaron información sobre la minería de metales y compartieron experiencias sobre las luchas de oposición a la misma. CODIDENA quedó integrada por las organizaciones pastorales de cada municipio. Esta instancia permitió la consolidación del trabajo conjunto de las diferentes organizaciones como el Comité por la Vida de San Rafael, el Colectivo Madre Selva, el Parlamento del Pueblo Xinca (organización del pueblo Xinca, cuya sede se encuentra en Cuilapa, Santa Rosa), y el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) que se sumó posteriormente al trabajo de asesoría para consultas comunitarias y algunas acciones legales de apoyo a líderes y lideresas criminalizados por la empresa minera.²¹

El Comité está vigente a la fecha; es un comité de hecho y no de derecho, donde actualmente los mandos superiores se han rotado y por razones de seguridad se han eliminado los cargos o títulos. Dicho Comité es el único grupo de personas organizadas y en resistencia a la actividad de la minería química de metales en San Rafael las Flores.²² Pero también es importante notar que parte de la resistencia contra la minería, proviene de algunos Consejos de Desarrollo Comunitarios (COCODES), una estructura organizativa con el respaldo legal del Estado.

2.2 CODIDENA (Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza)

En noviembre de 2010, inician reuniones entre vecinos de San Rafael en la Iglesia Católica del municipio de Casillas, para conocer desde la iglesia con mayor profundidad la problemática que se estaba generando en el municipio y se amplía la relación de coordinación a nivel de iglesia y organizaciones para trabajar juntos en informarse sobre este tipo de proyectos y sus impactos tanto económicos, sociales, políticos, legales y ambientales.

En ese mismo mes de noviembre del año 2010, las comunidades indígenas como Jumaytepeque, en el

²⁰ ODHAG. Op. Cit., y Colectivo Madre Selva, agosto 2015. Op. Cit.

²¹ Colectivo Madre Selva, agosto 2015. Op. Cit.

²² ODHAG. Op. Cit., y Colectivo Madre Selva, agosto 2015. Op. Cit.

municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa, que es una de las comunidades que integran el Parlamento del Pueblo Xinka, también deciden apoyar los procesos para conocer a profundidad ésta problemática.

En diciembre de 2010, la Diócesis de Santa Rosa, y los párrocos de los municipios del Valle de Santa Rosa, en reunión con integrantes de la Junta Directiva del Parlamento Xinka, proponen que dentro de la iglesia debe existir una dependencia que trabaje con las comunidades en defensa de la naturaleza, y así nace CODIDENA. A partir de su conformación y a la fecha CODIDENA, ha estado acompañando al Comité en Defensa de la Vida y por la Paz, en las acciones de concientización y sensibilización en las comunidades.

3. Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Tahoe Resources realizó un estudio de impacto ambiental, en 2011, el cual presentó al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para su aprobación. El EIA fue elaborado por Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S.A. su aprobación era necesaria para iniciar los trámites de la licencia de explotación. Este EIA fue aprobado el 21 de octubre de 2011, posteriormente el Colectivo Madre Selva (CMS) realizó un informe del análisis de dicho EIA. De igual manera, el 12 de marzo de 2012, Robert H Robinson, Steve Lauderman y James Montgomery a petición del CMS, presentan un Análisis de EIA del proyecto Escobal.²³ Los dos análisis encontraron serias deficiencias, concluyendo que el EIA no debió ser aprobado por parte del MARN.²⁴

4. Consultas municipales a solicitud de vecinos de municipios circunvecinos de San Rafael Las Flores

Una de las funciones de CODIDENA, en el año 2011 fue la de concientizar y socializar la problemática minera en la parte norte de Santa Rosa, con ello se hizo énfasis en el derecho a la Consulta; es así como el Comité en Defensa de la Vida y por la Paz, CODIDENA, CALAS, Colectivo Madre Selva y el Parlamento del Pueblo Xinka incentivan a las poblaciones de Casillas, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y Mataquescuintla a promover las Consultas de Vecinos, como una herramienta legal para determinar con apego a la ley cual es la postura de las comunidades entorno a la imposición de los proyectos extractivos.

Como resultado se realizaron cuatro Consultas Comunitarias Municipales a solicitud de vecinos (Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima, Casillas en 2011 y Mataquescuintla, Jalapa en 2012), las cuales se basaron en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en los artículos 60-66 del Código Municipal de Vecinos (Decreto No. 12-2002). Mientras que en San Rafael Las Flores la municipalidad impidió realizar la consulta.

El 3 de Julio de 2011, se realiza la Consulta Municipal de Vecinos en el municipio de Nueva Santa Rosa en donde el 98.86 % de los votos contabilizados dijo NO a la minería.

El 10 de julio de 2011, se realizó la Consulta Municipal de Vecinos en el municipio de Santa Rosa De Lima, en donde el 98.34% respaldó el NO a la minería.

El 7 de agosto de 2011, se realizó la Consulta Municipal de Vecinos en el municipio de Casillas votando por el NO el 98.61% de los votantes.

²³ [http://www.infoiarna.org.gt/rediarna/2012/Red%20IARNA%2019%20\(02\)/adjuntos/analisis-estudio-impacto-ambiental-el-escobal.pdf](http://www.infoiarna.org.gt/rediarna/2012/Red%20IARNA%2019%20(02)/adjuntos/analisis-estudio-impacto-ambiental-el-escobal.pdf)

²⁴ ODHAG. Op. Cit., y Colectivo Madre Selva, agosto 2015. Op. Cit.

El 11 de noviembre de 2012, se realizó la Consulta Municipal de Vecinos en Mataquescuintla, en donde más de 52 % de las personas empadronadas emitieron su voto. En esta consulta el 98.68% de los votantes expresaron NO a la minería.

Las consultas de Nueva Santa Rosa y de Santa Rosa de Lima, fueron objeto de acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). En ambos casos la Corte de Constitucionalidad (CC) se pronunció al respecto, fallando a favor de las dos Consultas a Solicitud de Vecinos (CC 19-0-2012, expedientes acumulados 2433-2011, 2480-2011).

En el caso de la consulta de Casillas, la empresa Minera San Rafael (Minerasa), presentó una acción de Amparo en contra de la Consulta de Vecinos, manifestando que sólo el TSE, podía efectuar consultas populares. El amparo no se otorgó y esto fue ratificado por la CC al denegar la apelación que interpuso Minerasa.

En el caso de la Consulta de Mataquescuintla, Jalapa, con fecha 9 de Noviembre de 2012, un abogado particular interpuso acción de Inconstitucionalidad en contra del Reglamento de la Consulta Municipal a Solicitud de Vecinos, dicho reglamento había sido publicado en el Diario Oficial con fecha 22 de octubre de 2012.

El 11 de Noviembre de 2012 se celebró la Consulta Municipal a Solicitud de Vecinos en la cabecera municipal de Mataquescuintla, Jalapa.

Poco más de un año después, el 9 de diciembre de 2013, la CC sentó un precedente legal al avalar, por primera vez en su historia, que los resultados de una consulta comunitaria sobre la construcción de proyectos de minería sean de cumplimiento obligatorio para una municipalidad. La resolución de la Corte se refería a la consulta comunitaria de Mataquescuintla del departamento de Jalapa. En su argumento la CC se basó en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y tribales, aduciendo que “es incuestionable el derecho de los pueblos a ser consultados pero es necesario reforzar el procedimiento adecuado (para las consultas)”, ya que la vinculación no se da hacia la regulación del Estado sino al ámbito de competencia de la municipalidad.²⁵

En mayo de 2013, el gobierno de la República instauró un Estado de Sitio que abarcó los municipios de Casillas y San Rafael las Flores, departamento de Santa Rosa, y los municipios de Mataquescuintla y Jalapa, departamento de Jalapa, lo cual casi interrumpió el proceso de consultas comunitarias en municipios donde hay licencias mineras, a no ser por las realizadas en Jalapa en noviembre de 2013,²⁶ y en la aldea Sabana Redonda, del municipio de San Rafael Las Flores, en enero de 2014.²⁷

Más de un año después, el 17 de mayo de 2015, se retomaron con la consulta comunitaria en el municipio de San Juan Tecuaco, Santa Rosa. Según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), 98% de los votantes votó por el NO a la minería y 1% por el SÍ.²⁸ La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la CC, el cual al momento de escribir este informe no se había resuelto.

Además de las Consultas Comunitarias Municipales, se realizaron varias Consultas Comunitarias de Buena Fe en aldeas de San Rafael Las Flores. El proceso de estas consultas también se obstaculizó debido al Estado de Sitio.

²⁵ <http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/cc-avala-consulta-popular-que-vecinos-se-oponen-mineria>

²⁶ http://www.prensalibre.com/jalapa/Consulta-Jalapa-Mineria-Montana_Xalapan_0_1027097351.html

²⁷ <http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/realizan-consulta-comunitaria-mineria-san-rafael-flores>

²⁸ http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/6047-pdh-observa-consulta-popular-en-san-juan-tecuaco.html#_VbfEPIViko

Inmediatamente antes y después del otorgamiento de la licencia de explotación Escobal, se realizaron nueve consultas de buena fe en las aldeas de San Rafael Las Flores, promovidas por el Comité en Defensa de la Vida y la Paz, entre ellas en San Juan Bosco, El Volcancito, La Cuchilla, El Chan Grande, Las Delicias, Los Planes, Barrio Oriental y Sabana Redonda. En 8 de las 9 comunidades ganó el NO mayoritariamente con la única excepción de Sabana Redonda, aldea inmediata a la mina, y sede de los dormitorios de los trabajadores que estaban construyendo las instalaciones mineras.

COMUNIDAD	FECHA	%SI	%NO
SAN JUAN BOSCO	17-2-2013	00.73	99.27
LOS PLANES	3-3-2013	6.50	93.44
EL VOLCANCITO	17-3-2013	00.80	99.20
LA CUCHILLA	23-3-2013	4.35	96.65
BARRIO ORIENTAL	14-4-2013	2.67	97.33
LAS DELICIAS	21-4-2013	1.16	98.84
EL RENACIMIENTO	21-4-2013	00.00	100.00
EL CHAN GRANDE	21-4-2013	1.74	98.26

Fuente: ODHAG. Op. Cit.

La resistencia a la minería en Santa Rosa se expandió hacia el vecino departamento de Jalapa donde los municipios vecinos de Mataquescuintla, Jalapa y San Carlos Alzatate se ven afectados por los planes de expansión del actual proyecto Escobal de Tahoe Resources. Esta expansión se materializa con la aprobación de una nueva área de exploración minera llamada “Juan Bosco” que afecta a Mataquescuintla.²⁹ El territorio del municipio de Jalapa está integrado en su mayoría por las tierras comunales propiedad de la “Comunidad Indígena Montaña Santa María Xalapán”, habitada por unos 85 mil campesinos, los campesinos xalapas exigen que las autoridades reconozcan las 973 caballerías que les fueron otorgadas en 1752, por una Cédula Real de Carlos V de España, y que se cancelen 16 licencias de exploración y 15 de explotación minera de metales.³⁰

En la organización de todas estas consultas jugaron un papel muy importante el Parlamento del Pueblo Xinca, CODIDENA y el Comité de Defensa de la Vida y por la Paz de San Rafael Las Flores.

Todo ese proceso de organización y resistencia pacífica contra la minería, es resumido por el alcalde de Mataquescuintla, Hugo Loy, de la manera siguiente: “La población ya ha mostrado su descontento con la minería en la zona y siempre lo había hecho en actos públicos –marchas, manifestaciones, plantones– que siempre fueron pacíficos”. Loy se refiere así a todas las actividades que se iniciaron desde finales de 2011, con la llamada *Revolución de las Flores*, coordinadas por el Comité en Defensa de la Vida y por la Paz de San Rafael Las Flores, CODIDENA, el Parlamento Xinca, el CALAS y el Colectivo Madre Selva.

4.1 Relaciones de poder municipal, económico y político

La Minera San Rafael (Minerasa) gestó relaciones con grupos de poder político y económico para facilitar

²⁹ <http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510400/000106299315001291/exhibit99-1.htm>

³⁰ Colectivo Madre Selva, agosto 2015. Op. Cit. Este caso es mucho más complejo. La información de la Cédula Real se obtuvo como resultado de las demandas de la marcha indígena y campesina de 2012, cuando se instaló una mesa de diálogo y una comisión ad-hoc para la resolución del conflicto de tierras. También es importante mencionar que parte de la disputa de tierras es con el político Mario Estrada del partido Unión del Centro Nacional (UCN) quien ha sido alcalde de Jalapa. También el conflicto de tierras o los conflictos de tierras xincas fueron objeto de consideración de la ONU posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, hay varios conflictos que no han progresado o que han progresado poco, pero el de Xalapán es el mejor conocido.

y garantizar sus operaciones, buscando ganar la confianza y el apoyo de sectores de la población, para contrarrestar de esa manera la oposición y resistencias comunitarias.

Un ejemplo es la donación de US\$2.3 millones otorgada por Tahoe Resources,³¹ por medio de Minerasa, al programa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) denominado “Mejores Familias”, el cual es promovido por la Fundación del Azúcar (Fundazúcar) que es el brazo social de los ingenios azucareros de Guatemala y considerados uno de los principales sectores en donde descansa el poder económico de las elites económicas de Guatemala. Esa donación, para los años 2014 y 2015, forma parte de la alianza público-privada en la que participan el gobierno, Fundazúcar y Minerasa.³²

Fundazúcar es dirigida por Herbert González Hertzsch, uno de los principales socios de la Compañía Agrícola Industrial Palo Gordo (Ingenio Palo Gordo), al igual que su hermano Luis que dirige una corporación agrícola de varias empresas cafetaleras. Con esta corporación agrícola trabajó Iván Antonio Morales del Cid previo al Estado de Sitio de mayo de 2013, y que en marzo de 2013 fuera contratado por Minerasa para ejercer las funciones siguientes: Enlace Institucional y Gubernamental de Minera San Rafael; Relacionamento Comunitario-Municipal de Minera San Rafael; Soluciones de conflictividad Social-Empresarial, para Minera San Rafael; Proyectos de Desarrollo Comunitario (Agrícolas, Reforestación, Salud, Educación) de Minera San Rafael; y Proyectos con Instituciones Privadas y Gubernamentales con la Minera San Rafael.³³

Morales del Cid fue un enlace importante de Minerasa con las municipalidades y el partido político de gobierno, al igual que con la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ) y los cafetaleros de Santa Rosa.³⁴ Fue también uno de los gestores para el pago de regalías y donaciones de Minerasa a las municipalidades que apoyaban el proyecto minero en los departamentos de Santa Rosa y Japala.

Esas funciones de Morales del Cid se dieron a partir de la relación familiar con el alcalde municipal de Barberena, Santa Rosa, Rubelio Recinos, quien dirige esa municipalidad desde 2000. Morales del Cid está casado con una hija de Recinos, alcalde que es el secretario general del partido de gobierno, Partido Patriota (PP) (2012-2015), y que más respalda el proyecto minero de Tahoe Resources, y uno de los seis alcaldes de Santa Rosa que recibe fondos de la minera.³⁵

5. Militarización

5.1 Empresas de seguridad privada

Una vez establecida la resistencia pacífica a finales de 2011, inmediatamente comienza la criminalización, difamación y estigmatización de los líderes del Comité en Defensa de la Vida y por la Paz, de los pobladores organizados en Mataquescuintla y de CODIDENA (muchos de ellos de Santa Rosa de Lima), de parte del Estado de Guatemala y por las fuerzas de seguridad privada de Minerasa.

Durante ese proceso organizativo y de resistencia, se han violado y obviado varios derechos fundamentales, tales como el derecho de Consulta, el derecho de Consentimiento libre, previo e informado, Acceso a la justicia e igualdad de los pobladores de San Rafael las Flores. Los dos últimos gobiernos de Álvaro

³¹ <http://www.tahoecsr.com/tahoe-supports-national-hunger-program/>

³² <http://www.agn.com.gt/index.php/component/k2/item/1462-gabinete-de-desarrollo-social-verifica-logros-del-programa-mejores-familias-en-rabinal>

³³ <https://gt.linkedin.com/pub/ivan-antonio-morales-del-cid/a1/646/a35>

³⁴ <http://www.tahoecsr.com/what-does-a-cup-of-coffee-mean/>

³⁵ <http://www.latribunaguatemala.com.gt/el-desfalco-de-rubelio-recinos/> http://www.prensalibre.com/santa_rosa/Vecinos-piden-alcaldes-informacion-destino-regalias-mina-San-Rafael-Santa-Rosa_0_1199280219.html
<http://www.mem.gob.gt/2014/01/10/primera-entrega-de-regalias-voluntarias-rebasa-los-q12-millones/>

Colom y Otto Pérez Molina, respectivamente, hicieron caso omiso a esas violaciones, y favorecieron con su actuar y sus políticas de gobierno a Minerasa.

Esos procesos de participación ciudadana, no fueron tomados en cuenta por ninguno de esos gobiernos. Por el contrario, la respuesta a esos ejercicios democráticos, ha sido una política de represión a los líderes comunitarios.

Uno de los líderes más afectados penalmente ha sido Óscar Roderico Morales García, del Comité de Defensa de la Vida y por la Paz de San Rafael Las Flores sindicado de múltiples cargos según expedientes tramitados por el Ministerio Público (MP) desde 2012. Más recientemente, en 2014, Camilo Ernesto Medina Mazariegos, Gerente de Asuntos Externos de Minerasa, acusó Morales García, por el delito de amenazas. El caso tuvo una sentencia en junio de 2015 contra Morales García que dictaba seis meses de prisión. Sin embargo, el Juez también dictó “perdón judicial” que elimina los meses de prisión. Ambas partes apelaron y al momento de escribir este informe aún no se habían resuelto.³⁶

Denuncias presentadas ante el MP contra defensor de derechos humanos, Oscar Morales

Nombre	No. de expediente	Tipo penal / sindicación
Oscar Roderico Morales Garcia	MP0012-2012-60276	Usurpación de funciones
	MP001-2012-108216	Coacción, amenazas
	MP015-2013-7757	Amenazas
	MP297-2013-3645	No es delito
	MP0010-2002-19	Lavado de dinero y otros activos

Fuente: Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH). INFORME ANUAL CIRCUNSTANCIADO. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA DE LABORES 2014.

Una característica muy importante en este proceso de criminalización, es que el más de un centenar de casos ha sido desestimado por falta de pruebas o que incluyen pruebas y/o testimonios falsos. Nadie permanece en prisión, aunque varias de las personas criminalizadas han permanecido días o meses prisioneros mientras se dilucidaba su situación.

El primer caso de criminalización documentado debido al proyecto minero Escobal, es el de cinco líderes del Comité de Defensa de la Vida y por la Paz, ocurrido el 5 de noviembre de 2011, a quienes se les imputaron cargos de secuestro, terrorismo y allanamiento. Quien interpuso la denuncia fue el representante legal de Minerasa, Carlos Roberto Morales Monzón. El caso está documentado por el Ministerio Público (MP) en el Expediente MP-431-2011-918. La misma empresa minera pidió que se desestimara el caso, considerándose que el propósito era desprestigiar a los líderes.

Entre esos líderes destaca el entonces coordinador del Comité de Defensa de la Vida y por la Paz de San Rafael Las Flores, Amadeo de Jesús Rodríguez, criminalizado a partir de entonces por diversos casos. Las cinco personas se encontraban en el grupo de pobladores que se opuso a la instalación de postes para el tendido eléctrico y suministro de energía eléctrica desde una planta del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), el 11 de octubre de 2011. Las empresas afectadas, subcontratadas por Minerasa, fueron Geotecnología, Construcción y Servicios, S.A. (Geoconsa) propiedad del ex ministro de Energía y Minas, Raúl Archila (2000-2003), y la Corporación ASAF, S.A. que es una constructora de postes de concreto.

En ese caso estuvo involucrada la primera empresa de seguridad privada contratada por Minerasa, regis-

³⁶ El gerente Camilo Medina, es primo del viceministro de Tecnología de Información y Comunicaciones del Ministerio de Gobernación, Juan Carlos Argueta Medina, quien ejerció el cargo durante todo el gobierno del general Otto Pérez Molina, y tuvo responsabilidades de control e inteligencia en San Rafael Las Flores, según denuncias de pobladores. Esta relación familiar ha sido denunciada por pobladores de San Rafael Las Flores. En su tesis de graduación, Argueta Medina la dedica, entre otros, a Camilo Medina y a Juan Pablo Marín, estos dos últimos socios de la empresa SIAFSA la cual presta servicios a la Minera San Rafael. Ver: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/01/01_2572.pdf <http://www.scribd.com/doc/235131359/DIM-Olopa#scribd>

trada con el nombre de Servicios de Protección Particular, S.A. (Serprop), propiedad de Carlos Quintanilla Villegas, quien en 2008 estuvo a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), durante el gobierno de Álvaro Colom, y destituido ese mismo año cuando fue señalado de incumplimiento de deberes, espionaje genérico e interceptación o reproducción de comunicaciones.³⁷

Por ese caso, Serprop dejó de prestar servicios de seguridad de acuerdo con miembros del Comité de Defensa de la Vida y por la Paz. Minerasa luego contrató a la empresa de servicios de seguridad privada Corporación Internacional de Seguridad, S.A. (Corinsa), la cual prestó servicios hasta abril de 2013, conjuntamente con Alfa Uno, S.A. del grupo israelita Golan, S.A.. En el caso de Corinsa, esta empresa opera con los nombres comerciales Super Control 24 y Grupo Swat.

El 17 de septiembre, en un tercer intento de Minerasa por instalar postes para transmitir electricidad desde la planta del INDE en Mataquescuintla, hubo una manifestación de pobladores de Mataquescuintla que impidió la instalación de los postes. Los empleados de la minera a cargo estaban protegidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de seguridad privada de Corinsa quienes según pobladores que protestaban que fueron entrevistados para este informe, daban órdenes a los agentes de la PNC. Ese mismo día, los pobladores se dirigieron hacia las instalaciones de la minera, en San Rafael Las Flores, a pocos kilómetros de la planta del INDE.

Al día siguiente, el 18 de septiembre de 2012, mientras manifestaban frente a la minera, los pobladores fueron desalojados violentamente por miembros de la PNC, de la minera, de la empresa de seguridad privada de la minera y el Ejército. Al menos 32 manifestantes fueron capturados mientras manifestaban en contra de la mina, acusados de allanamiento, incendio y terrorismo. Todos los delitos imputados fueron sobreseídos por Juez de Primera Instancia de Cuilapa, Santa Rosa y ratificados por la Corte Mixta de Apelaciones de Jalapa, departamento de Jalapa en abril del 2013. Los elementos de investigación del MP no fueron suficientes. Actuó como querellante adhesivo la Minera San Rafael. Los capturados eran de Santa Rosa de Lima, Mataquescuintla y San Rafael Las Flores. Los medios de comunicación mencionan que la población ingresó a la propiedad de la mina, pero los testigos niegan esta versión. El MP giró órdenes de captura contra el Mayordomo de la comunidad de Santa María Xalapán y Presidente del Parlamento Xinka, Roberto González Ucelo, así como a Rudy Pivaral del Comité de Defensa de la Vida y por la Paz de San Rafael Las Flores, a quienes se les responsabiliza de la muerte del agente de la PNC Eduardo Demetrio Camacho.³⁸

Corinsa es una empresa de seguridad privada, que legalmente aparece registrada a nombre de José Horacio Fúnez Gálvez, candidato a diputado para las elecciones generales a celebrarse en septiembre de 2015, por el Departamento de Sacatepéquez, postulado por el partido Corazón Nueva Nación (CNN), un partido político organizado e integrado por militares retirados.

5.2 Robo de explosivos

El 19 de noviembre de 2012, un convoy de la empresa Mayaquímicos, S.A.,³⁹ contratista de Minerasa, que supuestamente transportaba explosivos hacia la mina Escobal, fue detenido por un grupo grande de

³⁷ http://noticias.terra.com/noticias/ejercito_ocupa_casa_presidencial_despues_de_hallar_evidencias_de_espionaje/act1405758

³⁸ Camacho murió en San Rafael Las Flores, a finales de abril de 2013, durante el conflicto previo al Estado de Sitio. En 2009, Camacho fue identificado por The Military Group de la Embajada de Estados Unidos, como un agente involucrado en violaciones a los derechos humanos. <https://cablegatesearch.wikileaks.org/cable.php?id=09GUATEMALA868>

³⁹ Mayaquímicos, S.A., es una empresa que pertenece al Instituto de Previsión Militar (IPM). Es una de las pocas empresas autorizadas para la producción, importación y manejo de explosivos para uso en construcción, demolición e industria extractiva. Su junta directiva está integrada por militares que pertenecieron al Alto Mando Militar en años pasados, desde de la década de 1980. <http://www.ipm.org.gt/>

presuntos pobladores. Procedente de instalaciones de Mayaquímicos en el municipio de Sanarate, El Progreso, era la primera vez que la empresa transportaba explosivos por la ruta de Mataquescuintla, la cual conecta con Sanarate.⁴⁰ Usualmente, se transportaban por la ruta que de Casillas conduce a San Rafael Las Flores.

Pobladores de Mataquescuintla y San Rafael Las Flores entrevistados para este informe, negaron que haya habido robo de explosivos y aseguraron que todo fue un montaje coordinado entre Mayaquímicos y Minerasa.

Minerasa y Mayaquímicos, en cambio, consideraron que hubo robos, incluso acusaron a los pobladores de la quema de 6 vehículos y una casa. Aunque los explosivos nunca aparecieron o se recuperaron, al menos 18 personas líderes de los movimientos de resistencia pacífica en Mataquescuintla y San Rafael Las Flores fueron señalados de ser los autores del hecho.

El proceso legal iniciado contra las 18 personas, quedó documentado en el expediente del Ministerio Público número MP009/2012/5316, fechado 15 de enero de 2013, en donde se solicita a la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC (DEIC) información sobre el caso. La DEIC, en el Oficio No. 1608-2013.REF.ELDO/sria., de fecha 27 de febrero de 2013, entregó esa y otras informaciones al Fiscal contra el Crimen Organizado, Rony Elías López Jérez, quien requirió exclusivamente información sobre el robo de explosivos.

Sin embargo, la DEIC incluyó una investigación realizada sobre un ataque “de parte de terroristas al personal de seguridad de la Minera San Rafael, S.A.” ocurrido el 12 de enero de 2013. En ese caso hubo dos muertos y siete heridos en el personal de seguridad de la empresa. Sin embargo, el caso sigue sin esclarecerse.

Según pobladores entrevistados, la información proporcionada por la DEIC provenía directamente del jefe de seguridad de Minerasa, el peruano Alberto Rotondo. Esto se notaba no sólo por el lenguaje utilizado sino también por las personas criminalizadas, todas líderes antiminería. El Oficio No. 1608, es un informe extenso, con señalamientos claros hacia esos líderes, tal el caso de Amadeo de Jesús Rodríguez Aguilar, del Comité de Defensa de la Vida y por la Paz de San Rafael Las Flores.

Para documentar sus aseveraciones, los pobladores citan el Reporte de Incidente No. 003/2012, que lleva el nombre del jefe de seguridad de Minerasa, y con logotipo de la empresa minera, donde acusa a líderes antiminería de Mataquescuintla de “restricción de libre tránsito, amedrentamiento y amenazas con armas de fuego” contra personal de la minera.

En ese reporte, el autor hace conclusiones delicadas contra la Iglesia Católica del área, a la que prácticamente coloca al frente del movimiento antiminería. También recomienda “Implementar de la forma más rápida una estrategia legal y publicitaria en medios de comunicación que pongan en evidencia a los líderes de los grupos que cometan estos actos, especialmente el involucramiento de la Iglesia Católica, a fin de que las autoridades se vean forzadas a tomar acciones legales contra ellos.”⁴¹

⁴⁰ El caso ocurrió una semana después de celebrada la Consulta Comunitaria Municipal de Mataquescuintla.

⁴¹ A manera de ejemplo se cita el programa radial “Hablando claro”, que era dirigido hasta muy recientemente por el periodista y político Mario David García Velásquez, el cual se transmitía por la cadena radial Emisoras Unidas. El programa dejó de transmitirse luego que García Velásquez aceptará de última hora ser el candidato presidencial del oficialista Partido Patriota (PP), siendo proclamado el 17 de mayo de 2015. En dicho programa se atacó constantemente a los opositores del proyecto minero de Minerasa, sobre todo al alcalde de Mataquescuintla, Hugo Loy. Igualmente, se puede citar el diario digital RepúblicaGT, y como ejemplo se puede ver este artículo: <http://www.republicagt.com/en-profundidad/calas-apoya-a-candidato-de-lider-que-contrata-a-sicario/>

5.3 El Estado de Sitio

El 2 de mayo de 2013, tras varios hechos de violencia registrados en meses previos y fuertes presiones de empresarios mineros, el gobierno decretó Estado de Sitio, inicialmente por 30 días, aunque luego lo concluyó 8 días después, decretando posteriormente Estado de Prevención.⁴²

Meses antes de instaurarse el Estado de Sitio ocurrieron presiones empresariales, iniciadas en 2012, las cuales se evidencian en el amparo interpuesto por Minerasa ante la Corte de Constitucionalidad (CC), según el Expediente 2728-2012, Amparo que la CC denegó el 26 de febrero de 2013.

El amparo fue promovido por el gerente administrativo y representante legal de Minerasa, Carlos Roberto Morales Monzón, contra el Presidente de la República de Guatemala, el Ministro de Gobernación, el Ministro de la Defensa Nacional, el Director de la Policía Nacional Civil, el Comisario de la Policía Nacional Civil de la Comisaria No. 22 del departamento de Jalapa y el Comisario de la Policía Nacional Civil de la Comisaria No. 32 del departamento de Santa Rosa.

En esencia, Minerasa argumentaba que el Estado no estaba garantizando la actividad minera en las licencias aprobadas y que no brindaba la seguridad necesaria. En el expediente se indica que “El Estado no está velando por su seguridad al permitir que los vecinos manifiesten contra la realización de las actividades para las cuales ya se les confirió la autorización y licencias correspondientes, cometiendo hechos delictivos y efectuando bloqueos frente a las instalaciones que impiden su libre locomoción.”.

Los argumentos de Minerasa se dieron meses antes que se le aprobara la licencia de explotación de Escobal, SEXT-015-11. Tras el dictamen de la CC, en febrero de 2013, el MEM anunció la aprobación de licencia de explotación, el 3 de abril de 2013.

Al final, el estado de sitio fue saludado por el grupo de proveedores de Minerasa, por medio de un campo pagado publicado en medios de prensa escrita, el 7 de mayo de 2013. Fue firmado por 36 empresas relacionadas con el sector de la construcción, y manifiestan su “respeto y respaldo a la decisión del gobierno de Guatemala para restablecer el orden público y el Estado de Derecho en los municipios de Santa Rosa y Jalapa.” Entre las empresas firmantes se encontraban Cementos Progreso, Aceros Arquitectónicos, Mixto Listo y PADEGUA.

A cargo del Estado de Sitio estuvo el entonces Subjefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Manuel López Ambrosio, delegándole esa responsabilidad el Presidente de la República, general Otto Pérez Molina. Al mes siguiente del Estado de Sitio, el 4 de junio de 2013, López Ambrosio fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la Defensa, y un mes después, el 16 de julio de 2013, fue nombrado Ministro de la Defensa. En su rápido ascenso, habría pesado el papel jugado durante el Estado de Sitio, además de ser originario de Jalapa y de haber sido el Comandante de la Tercera Brigada del Ejército con sede en Jalapa, cuando se le puso a cargo del operativo militar.

Durante el Estado de Sitio se instalaron tres destacamentos militares en Santa María Xalapán, Jalapa; Mataquescuintla, Jalapa; y Casillas, Santa Rosa. De estos los dos últimos permanecen activos. Pobladores entrevistados también indicaron que una oficina de inteligencia militar se instaló en la cabecera departamental de Jalapa.

5.4 Comisión Interinstitucional de Desarrollo Integral

Al dictamen de la Corte de Constitucionalidad (CC), en febrero de 2013, le siguió una decisión gubernamental.

⁴² <http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/gobierno-levanta-estado-sitio-santa-rosa-jalapa>

mental importante, que con el tiempo puede decirse que también sirvió como fundamento para la instauración del Estado de Sitio.

El proyecto minero Escobal entró en la categoría de “recursos naturales estratégicos” definida por el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y, por lo tanto, la situación en San Rafael Las Flores se convirtió en un problema de seguridad nacional. Esto quedó plasmado en el informe anual de 2013 de la Secretaría Técnica del CNS, en donde se especifica que en marzo de 2013, esa instancia aprobó la constitución de la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Integral para instalarse en San Rafael Las Flores “con la finalidad de elaborar políticas, estrategias, proyectos y recomendaciones a este Consejo, para la atención integral de la problemática de seguridad y desarrollo, que permitan mejorar la calidad de vida de la población y garantizar la protección del ambiente.”

La Comisión quedó instalada luego que se aprobara el Acuerdo Gubernativo propuesto por la Secretaría Técnica del CNS, dirigida por el general Ricardo Bustamante Figueroa. La propuesta del Acuerdo Gubernativo se presentó en marzo de 2013, en la que se abordaba la constitución del Grupo Interinstitucional de Recursos Naturales Estratégicos (Minería), que se ubicaría en San Rafael Las Flores, y que fuera presentado por la Comisión de Asesoramiento y Planificación (CAP) del CNS. El Acuerdo, sin embargo, nunca fue publicado aunque sí aprobado por la Procuraduría General de la República (PGR) el 22 de mayo de 2013, cuando todavía estaba vigente el Estado de Prevención.⁴³

En un documento de la Secretaría Técnica del CNS, se presenta una cronología de lo ocurrido previo, durante y después del Estado de Sitio, aunque el operativo militar nunca se cita en el documento pero se deduce que la decisión surge de las reuniones entre las instituciones ahí citadas.⁴⁴

Entre los antecedentes citados en el documento que justifican la constitución de la Comisión Interinstitucional y la integración del Grupo Interinstitucional, se encuentran “Los problemas de conflictividad social derivados de la exploración y explotación minera en el país...(que) generaron en el área sur oriental del país, hechos violentos donde se registraron daños a la propiedad privada, ataques y secuestro de personal de la PNC, robo de material explosivo y armamento perteneciente a la minera y a la PNC respectivamente.” Todos esos ilícitos son los que pobladores de la resistencia antiminera señalan que fueron planificados entre la seguridad privada y las fuerzas de seguridad pública que luego justificarán y conducirán al Estado de Sitio, cuyo propósito según pobladores era acallar la protesta social en contra de Minerasa e interrumpir las consultas comunitarias municipales y de buena fe.

En la cronología se establece que el 26 de marzo de 2013, en la Tercera reunión del CNS, “se aprobó la conformación del Grupo Interinstitucional para Asuntos Mineros, el que se encargará...de formular las recomendaciones del caso al Consejo Nacional de Seguridad, estableciendo como punto de partida el municipio de San Rafael Las Flores, lugar donde opera la Mina El Escobal.”

El Grupo Interinstitucional quedó conformado por el Ministerio de Energía y Minas, quien lo preside; el Ministerio de Gobernación; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad; Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado; el Consejo Nacional de Áreas Protegidas; y la Comisión Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo.

Su constitución denota una influencia marcada en términos de seguridad e inteligencia de tipo militar,

⁴³ El Estado de Prevención derogó el Estado de Sitio, y fue declarado por medio del Acuerdo 8-2013, el 9 de mayo de 2013, durante 15 días. Indicaba, entre otras cosas: “considerando que, en los municipios... desde hace varios días se han suscitado hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado”. Los municipios fueron: Jalapa y Mataquescuintla, departamento de Jalapa; así como Casillas y San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.

⁴⁴ Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad. Cronología para la constitución del Grupo Interinstitucional de Recursos Naturales Estratégicos. Mayo de 2013.

algo que han destacado pobladores así como artículos de prensa.⁴⁵ Incluso, la Oficina Interinstitucional constituida y en funciones en San Rafael Las Flores es señalada de realizar, fundamentalmente, trabajo de inteligencia.⁴⁶

En la cronología merece destacar la reunión sostenida el 16 de abril, donde se incluyó como “punto principal, la presentación por parte del Gerente General de la empresa El Escobal sobre el cronograma de actividades después de la concesión de la licencia de explotación, la responsabilidad social empresarial y un análisis de gestión de riesgo.”

Posteriormente, en la reunión del 23 de abril, el representante de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIE), presentó “el Ciclo de Estrategia y Mapa de Procesos”. Mientras que el 7 de mayo, en pleno Estado de Sitio, el punto central fue el establecimiento de la Oficina Interinstitucional en San Rafael Las Flores.

En la Memoria de Labores de 2013 del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se cita la instalación de dicha Comisión en las siguientes palabras: “el logro tangible de haber habilitado la Oficina Interinstitucional para el Desarrollo Integral en el Municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, para atender el tema en el territorio, la cual es liderada por el MEM a través del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.” La habilitación de la Comisión, Grupo y Oficina, como se les denomina en distintos documentos, se gestó luego que la Procuraduría General de la Nación (PGN) aprobara el dictamen la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM, D-241-IV-2013.

El informe anual de Tahoe Resources, con fecha 31 de diciembre de 2013, y publicado el 12 de marzo de 2014, también aborda el asunto, y menciona que “El gobierno instaló una comisión interinstitucional para tratar asuntos comunitarios y supervisar aspectos de seguridad, la primera de su tipo en Guatemala. Es manejada por la Secretaría Técnica de Inteligencia, y está integrada por miembros de los ministerios de Gobernación, Energía y Minas, Ambiente y la Secretaría de Diálogo Nacional. Minerasa ayudó a la Comisión a localizar el espacio conveniente para instalar la oficina en San Rafael Las Flores.”

De esta manera se observa los vasos comunicantes entre el gobierno y la empresa minera para gestar la instancia que propiciará, desde el Estado de Sitio, un nuevo ambiente para favorecer los intereses mineros. Las presiones empresariales hacia el gobierno, sus actuaciones de carácter militar y policial, y las relaciones entre fuerzas de seguridad privada y pública posibilitaron que la resistencia minera disminuyera en intensidad durante todo ese período.

5.5 Represión en San Rafael Las Flores

Entre los hechos más dramáticos ocurridos previo a la instauración del Estado de Sitio, se encuentra el ocurrido el 27 de abril de 2013, cuando guardias de la empresa de seguridad privada, Alfa Uno, del grupo israelita Golan, por órdenes del entonces jefe de seguridad Alberto Rotondo Dall’Orso, disparan indiscriminadamente contra pobladores que protestaban pacíficamente frente a las instalaciones de la minera, en San Rafael Las Flores. Siete comunitarios resultaron heridos.

Por ese caso, el 30 de abril de 2013, el Ministerio Público capturó a Rotondo en el Aeropuerto Internacio-

⁴⁵ <http://www.plazapublica.com.gt/La%20oposici%C3%B3n%20a%20la%20miner%C3%ADa,%20la%20nueva%20amenaza%20a%20la%20seguridad%20nacional> <http://www.plazapublica.com.gt/content/una-red-cuasi-militar-para-proteger-la-mina-escobal>

⁴⁶ Al respecto, un comunicado de prensa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con número R80/15 y fecha 21 de julio de 2015, “expresa su preocupación ante la revelación de una gran cantidad de información que indica que varios gobiernos del hemisferio habrían adquirido e implementado programas de vigilancia de las comunicaciones electrónicas que pueden generar un perjuicio serio a los derechos a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión en la región.” Aunque no se citan cuáles gobiernos, coincide con las denuncias de los pobladores de San Rafael Las Flores. <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=998&IID=2>

nal La Aurora, ligándolo a proceso el 7 de mayo del mismo año por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y obstaculización a la acción penal. El Juez de Primera Instancia, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Rosa, ubicado en Barberena, dictó como medida sustitutiva arresto domiciliario, decisión apelada por la Fiscalía de Derechos Humanos el 10 de mayo 2013, la que solicitó que el tribunal le dicte prisión preventiva. El caso contra Rotondo sigue abierto. Una audiencia está programada para inicios de 2016.

El 18 de junio de 2014, los siete heridos demandaron a Tahoe Resources Inc. ante la Corte Suprema de British Columbia. Los demandantes son: Adolfo Agustín García, Luis Fernando García Monroy, Artemio Humberto Castillo Herrera, Wilmer Francisco Pérez Martínez, Erik Fernando Castillo Pérez, Noé Aguilar Castillo y Misael Eberto Martínez Sasvin.⁴⁷

La demanda, bajo los cargos de represión violenta de una protesta pacífica contra Tahoe Resources, la sustentan en el hecho que Tahoe Resources controla todos los aspectos importantes de la operación de la mina Escobal, incluyendo las prácticas y políticas de seguridad, y las relaciones comunitarias.

Dice el documento que “Tahoe expresa o implícitamente autorizó el uso excesivo de fuerza de Rotondo y del personal de seguridad contra los demandantes y fue negligente al fallar en prevenir a Rotondo y el personal de seguridad del uso excesivo de fuerza.” Si no fue así, dicen los demandantes, Tahoe como propietaria de Minerasa “expresa o implícitamente autorizó el uso excesivo de fuerza de Rotondo y del personal de seguridad contra los demandantes, por lo que Tahoe es responsable indirectamente de la conducta de Minerasa.” Finalmente, dice: “Con carácter subsidiario, Tahoe es responsable indirectamente de la conducta de Rotondo y del personal de seguridad.”

Tahoe niega que Rotondo Dall’Orso tenga una responsabilidad. En todo caso responsabiliza al Grupo Golan por no seguir el protocolo de normas internacionales para proveedores de servicios de seguridad. Esta posición aparece contenida en el informe anual 2014 del Consejo de Ética del gubernamental Fondo de Pensiones Global de Noruega (GPFNG, por sus siglas en inglés), publicado el 26 de enero de 2015, en el que se recomienda la “exclusión de Tahoe Resources Inc. del universo de inversiones del GPFNG debido a un inaceptable riesgo de la compañía en la contribución de serias violaciones a los derechos humanos.”⁴⁸

5.6 Declaración jurada de Vicepresidente de Tahoe Resources

Una declaración jurada de Donald Paul Gray, vicepresidente de la minera canadiense Tahoe Resources Inc., con fecha 24 de noviembre de 2014, destapó uno de los casos de mayor interés detrás del proyecto minero Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.⁴⁹

El testimonio del directivo de la minera ante la Corte Suprema de la provincia canadiense de British Columbia, fue consecuencia de la demanda legal que el grupo de comunitarios heridos de San Rafael Las Flores presentó contra Tahoe Resources, el 18 de junio de 2014.

Parte de la declaración jurada de Gray trata sobre el proceso de contrataciones que en materia de seguridad privada tuvo lugar a partir de 2011, cuando el proyecto minero comenzó el proceso de exploración para extraer plata, oro, plomo y zinc.

⁴⁷ Los demandantes reciben soporte jurídico de parte de un grupo de abogados canadienses, el Centro Canadiense para la Justicia Internacional (CCIJ) y el Centro de Acción, Legal, Ambiental y Social (CALAS). Seis de las siete víctimas del ataque se constituyeron como querellantes adhesivos dentro del proceso penal que investiga la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público de Guatemala.

⁴⁸ <http://etikkradet.no/files/2015/01/Council-on-Ethics-2014-Annual-Report.pdf>

⁴⁹ <https://tahoeontrial.files.wordpress.com/2015/04/affadavit-donald-paul-gray-24nov14.pdf>

De sus declaraciones se desprende la existencia de un conglomerado de empresas y personajes ligados a servicios militares, de inteligencia, a contratos de seguridad privada con grandes proyectos militares que arrastran las guerras en Afganistán e Iraq, y sus relaciones con proyectos y empresas con operaciones mineras y de construcción en Guatemala.

El documento, escrito en inglés, tiene un apartado titulado ‘Seguridad y otras operaciones en Guatemala’. En el inciso 53 se cita que, en 2011, Minerasa “contrató a International Security and Defense Management, LLC (ISDM), una compañía de manejo de seguridad y defensa con operaciones internacionales, con sede en California, para evaluar sus necesidades y requerimientos de seguridad durante la fase de construcción del proyecto Escobal. Como parte del contrato ISDM manejó un proceso de solicitudes propuestas de servicios de seguridad para Minerasa e hizo recomendaciones.”

En el inciso 54, se describe que “Como resultado del proceso de solicitud, Minerasa contrató al Grupo Golan, formalmente llamado Alfa Uno, Sociedad Anónima (Grupo Golan) para desarrollar e implementar el plan de seguridad de Minerasa. Grupo Golan es una compañía de seguridad con reconocimiento internacional que se especializa en proveer productos y servicios de seguridad a organizaciones multinacionales.”

El Grupo Golan proporcionó servicios de seguridad a Minerasa antes, durante y después de los incidentes del 27 de abril de 2013, reconoce Gray. El contrato entre Minerasa y Grupo Golan, se firmó en noviembre de 2011.

En el inciso 56, Gray indica que “Rotondo inicialmente proporcionó servicios a Minerasa por medio de ISDM. En 2012, Minerasa lo contrató como gerente de seguridad. Minerasa recibió y revisó información sobre la experiencia y calificaciones de Rotondo, incluyendo información sobre ISDM, como parte de su responsabilidad en el caso que guió a Minerasa a contratar sus servicios.”

En el inciso 57, se lee: “Como gerente de seguridad, a Rotondo se le requirió manejar los contratos de seguridad de Minerasa firmados con otras instancias, relacionados con la seguridad del proyecto Escobal. Minerasa empleó a dos o tres guatemaltecos en funciones de apoyo a Rotondo.

Gray declara que “Rotondo manejó el contrato de Minerasa con el Grupo Golan e interactuó con varios miembros del personal del Grupo Golan.” Las operaciones de seguridad del Grupo Golan se dieron tanto al proyecto Escobal como a las instalaciones en la Ciudad de Guatemala. Proporcionó entre 80 y 125 guardias de seguridad que protegieron instalaciones y transporte.

Después de una explicación con cierto detalle, sobre los casos de violencia ocurridos contra las instalaciones mineras y empleados de la seguridad privada, Gray declara que Rotondo renunció dos días después de los incidentes del 27 de abril de 2013, y terminó su relación con Minerasa. Sin embargo, Gray no dice por qué Rotondo siguió viviendo en las instalaciones mineras durante el tiempo que estuvo bajo arresto domiciliario, medida dictada tras la primera audiencia judicial celebrada en 2013. Actualmente se desconoce dónde se encuentra Rotondo, aunque el arresto domiciliario continúa.

Gray finaliza reconociendo las investigaciones que realiza el Ministerio Público en Guatemala en relación con Rotondo y los cargos imputados por causar heridas con arma de fuego y obstrucción de la justicia. Cita al presidente Otto Pérez Molina quien vincula varios incidentes de ilegalidad prevaleciente en la región por el crimen organizado y “grupos externos”, “los cuales según entiendo –dice Gray-, son grupos externos a la comunidad de San Rafael Las Flores.”

Sin citar el Estado de Sitio impuesto el 3 de mayo de 2013, Gray indica que a finales de ese mes, el gobierno “sumó más policías a las fuerzas policiales permanentes en varias municipalidades de la región, incluyendo San Rafael Las Flores. Ha habido una sensible baja en la tensión desde esa fecha.”

5.7 Seguridad privada internacional de tipo contrainsurgente

Un escenario de contexto para Tahoe Resources, Minerasa y los proveedores de servicios mineros en el área de San Rafael Las Flores, era muy similar a lo que estaba ocurriendo en el resto del país. Las manifestaciones de oposición a los proyectos mineros, entre otros, proliferaban en sus distintas expresiones. En todos se observaba cierto nivel de reacción gubernamental y empresarial de tipo militar. Pero en San Rafael Las Flores, se proyectaba otro con tintes contrainsurgentes, de inteligencia y contrainteligencia militar. De otra manera, no se puede explicar el porqué de la contratación de International Security and Defense Management, LLC (ISDM) para esa evaluación.

ISDM se encuentra en los listados de las compañías militares privadas más importantes a nivel mundial. Incluso, aparece en listados de compañías privadas militares, de origen mercenario, que se fundaron como consecuencia de las guerras en Iraq y Afganistán.

ISDM es una compañía fundada por los militares estadounidenses en retiro James V. Earl y William J. Earl, quienes poseen una vasta experiencia militar internacional, sobre todo en las guerras de Afganistán e Iraq. Registrada en Nevada y con sede en Coronado, San Diego, California, ISDM ofrece una variedad de servicios de seguridad y defensa que van desde las evaluaciones de amenazas y prevención de secuestros, hasta entrenamiento en operaciones militares, inteligencia militar, contrainteligencia y antiterrorismo. Sus servicios se prestan a empresas privadas y en contratos con el gobierno de Estados Unidos.

Cuando ISDM fue contratada por Tahoe Resources, la compañía militar recién había firmado un segundo contrato con Fluor Intercontinental, Inc. (FII), para suministrar personal calificado a ser desplegado en Afganistán. Ese personal era requerido por FII para cumplir con los requerimientos contractuales para el Programa de Aumento de Logística Civil (LOGCAP, por sus siglas en inglés) que FII firmó en 2007 con el gobierno de Estados Unidos para completar las operaciones del Ejército de Estados Unidos en Afganistán (contrato aún vigente).

FII es una corporación de California, con sede en Carolina del Sur, que pertenece a Fluor Government Group (FGG), la cual forma parte de la corporación transnacional Fluor Corp. de Estados Unidos. Fluor Corp. y sus filiales ofrecen una amplia variedad de servicios de construcción e ingeniería, al sector privado como minería y petróleo, y al gobierno de Estados Unidos como el caso de FGG que atiende contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Entre los conglomerados de empresas que integran Fluor Corp., se encuentra American Equipment Company, Inc. (AMECO) que agrupa empresas de equipo y construcción, varias de ellas en Latinoamérica. Se desconoce si ese vínculo entre ISDM y FII (Fluor Corp.) pudo ser un factor para la contratación de ISDM. En Guatemala, AMECO posee una subsidiaria: Maquinaria Ameco Guatemala, Limitada, con nombre comercial Ameco Guatemala, inscrita en el Registro Mercantil en 2007, y representada legalmente por Allen Robert Krebs Wickfors. La sede de Maquinaria Ameco Guatemala, es la misma de las empresas Equipos Múltiples de Guatemala, S.A. (Multiequipos); Compañía Pavimentadora de Guatemala, S.A.; y Pavimentos de Guatemala, S.A. (PADEGUA) todas representadas por Krebs Wickfors, e inscritas en el Registro Mercantil entre 1970 y 1997.

De ese grupo de empresas, Multiequipos y PADEGUA proveen servicios a Minerasa en el proyecto Escobal. En 2011, PADEGUA construyó el camino de acceso en la mina Escobal, y en 2012 construyó subdrenajes y un muro de contención.

La contratación de Grupo Golan cabe en ese escenario de cuasi guerra que se va dibujando, qué quizá ISDM imaginó. Uno de los consultores internacionales que participó en la evaluación de ISDM fue el militar estadounidense Tim Pascuarelli, de amplia experiencia en varios países en consultorías de seguridad en el campo militar, incluyendo Iraq y Afganistán.

Pascuarelli estuvo en Guatemala contratado por ISDM entre mayo y septiembre de 2011. En ese período de tiempo, ISDM mantuvo un anuncio de oferta de empleo para un Gerente de Seguridad en una mina en Guatemala en la página de la American Society of Industrial Security (ASIS) de la cual forman parte los hermanos Earl, máximos directivos de ISDM.

A partir de esa evaluación de ISDM, Grupo Golan fue contratado en noviembre de 2011 y, en el caso de Rotondo Dall'Orso, fue contratado quizá un mes antes, inicialmente por ISDM, para proveer servicios a Minerasa.

¿Qué pesó para que Tahoe Resources contratara al Grupo Golan? Quizá fue su experiencia previa con proyectos mineros en Guatemala y el hecho de tener la experiencia que ISDM buscaba. Golan Group, es una compañía de seguridad privada israelita fundada en 1983 por oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército de Israel. Su presidente es el capitán Yoram Yasur, y sus directores son Vered Yasur y Yehuda Senderey. En Guatemala, sus orígenes se remontan a la época de la guerra contrainsurgente que tuvo el respaldo del ejército e inteligencia israelí. Grupo Golan se constituyó en noviembre de 1987, bajo el nombre de Golan, S.A.. En 1990, se inscribió la empresa Alfa Uno, S.A. y en 1997, se inscribieron las empresas Tiendas Golan, S.A. y Golan Armas y Municiones, S.A., todas integrantes del Grupo Golan. Sus representantes legales son Yoram Yasur y Gerardo Antonio Wurmser Ordóñez, quien también es gerente general y fue presidente de GGCA Inc. (Golan Group Central America) inscrita en Panamá en 2007.

Grupo Golan tiene oficinas en Centroamérica, México, Venezuela, Colombia e Israel. Está inscrita en Florida, Estados Unidos, donde se encuentran sus oficinas centrales. En Guatemala vende sus servicios a varias empresas. Para los directivos de Tahoe Resources, el Grupo Golan no era desconocido ya que arrastraba varios antecedentes consigo. Entre 2005 y 2009 Golan vendió sus servicios de seguridad a las mineras Glamis Gold y Hudbay Minerales, en sus proyectos mineros Marlin y Fénix, respectivamente. En ambos casos ocurrieron violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes de seguridad. Incluso, HudBay Minerals está demandada en Canadá por el caso del asesinato del maestro Adolfo Ich.

5.8 Seguridad privada a cargo de Alberto Rotondo

Alberto Rotondo Dall'Orso, fue contratado como Gerente de Seguridad. Posee una formación militar de tipo contrainsurgente, que él públicamente admite.⁵⁰ Graduado en 1974 en la Marina de Guerra de Perú, entre 1980 y 1981 recibió capacitación en el Comando de Guerra Especial Naval de la Marina de Estados Unidos (US NSWC) con sede en Coronado, San Diego, California, donde también se localiza la sede de ISDM.

Entre 1985 y 1986, recibió el curso para oficiales en operaciones psicológicas, asuntos civiles y terrorismo de baja intensidad en la Escuela Especial de Guerra John F. Kennedy de Fort Bragg, North Carolina (John F. Kennedy Special Warfare Center and School), donde se localizan el Centro y la Escuela de Operaciones Psicológicas del Ejército de Estados Unidos. Años en que la guerra contrainsurgente se vivía en su máxima intensidad en Perú. Su información pública termina en 1991, cuando estudió en el Colegio Interamericano de Defensa, con sede en Washington D.C..

Desde la llegada de Rotondo a Minerasa, proliferaron las acciones de criminalización y los hechos de violencia detallados con anterioridad. Las órdenes de captura sin prueba alguna aumentaron considerablemente. El Fiscal de Crimen Organizado, Rony López, actuó a partir de información que Rotondo y Minerasa habría elaborado, tal el caso de los reportes de incidentes donde aparece el nombre Rotondo como autor, en lo que se señalaba directamente a líderes de la resistencia pacífica y hechos violentos.

⁵⁰ <https://gt.linkedin.com/pub/alberto-rotondo/66/828/165>

Por ejemplo, el 6 de abril de 2013, son capturadas 26 personas sin orden de juez, todas ellas de Mataquescuintla y San Rafael Las Flores, en un desalojo durante una manifestación frente a las instalaciones mineras. Fueron escuchados por juez competente 4 días después de ser capturados. Todos fueron liberados por orden del Juez de Primera Instancia de Barberena, Santa Rosa, por falta de mérito. CALAS logró que fuera la Fiscalía Especial de Derechos Humanos la que investigara.

Para los pobladores entrevistados, Rotondo fue el artífice de los planes de criminalización, desde 2011 hasta cuando se decretó el Estado de Sitio. En estos planes participaron conjuntamente el Fiscal, Rony López, quien los pobladores aseguran buscaba ser Fiscal General, y aunque no lo logró, sí fue nombrado como integrante del Consejo del Ministerio Público, órgano asesor de la Fiscalía General, en 2014. López tuvo a su cargo las investigaciones con el apoyo de la seguridad privada de Minerasa, la División Especializada e Investigación Criminal (DEIC) y la jueza Carol Patricia Flores Polanco quien estaba a cargo del proceso legal de los capturados durante el Estado de Sitio.⁵¹

El 30 de abril de 2013, previo a la instauración del Estado de Sitio, la jueza Flores Polanco realizó una audiencia oral en calidad de anticipo de prueba de declaración de testigos, en la que el MP le presentó la carpeta judicial MP0009-2012-5316/OF.2DO/OF.2DO, citada párrafos arriba, que contiene todo el proceso seguido por la Fiscalía de Crimen Organizado. En esta carpeta aparecen los nombres de 18 personas, todas con órdenes de captura, las cuales se extendieron durante el Estado de Sitio, señaladas por cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de haberlos retenido ilegalmente el 29 de abril de 2013, cuando cientos de pobladores de Santa María Xalapán y Mataquescuintla bloquearon su paso en Jalapa y retuvieron a 23 agentes. Los policías identificaron a las 18 personas a partir de fotografías que el Fiscal Rony López les mostró. Las 18 personas eran reconocidos líderes antiminería, y sus perfiles los llevaba el ejército durante el Estado de Sitio para ejecutar las órdenes de captura, los cuales habrían sido elaborados por Rotondo, aseguran pobladores entrevistados.⁵² Las 18 personas eran investigadas desde noviembre de 2012. Los pobladores también indican que quien estuvo a cargo de los operativos policiales antes y durante el Estado de Sitio, el comisario Telemaco Pérez, fue “premiado” por los servicios prestados. Efectivamente, el 26 de junio, un mes después de terminado el Estado de Sitio, fue ascendido a Director General de la Policía Nacional Civil (PNC).

5.9 Otras empresas de seguridad e instancias de inteligencia

Otro documento publicado en relación con la demanda legal contra Tahoe Resources es la declaración jurada de Roger Barany, quien tradujo al inglés las escuchas telefónicas autorizadas por el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, contra Rotondo. El documento tiene fecha 21 de enero de 2015.⁵³

Varios medios de comunicación publicaron extractos de esas escuchas, cuando se reprodujeron el 7 de mayo de 2013 en la Audiencia Pública que tuvo lugar en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Rosa. En estas escuchas se destaca las órdenes de Rotondo de disparar indiscriminadamente, con un lenguaje criminal y racista, durante los sucesos del 27 de abril de 2013 frente a las instalaciones mineras en Escobal.

⁵¹ El 30 de julio de 2015, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad a Flores Polanco a solicitud de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El 30 de abril de 2015, la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) interpusieron una acción para retirarle la inmunidad a la juzgadora por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

⁵² En total hubo 32 órdenes de captura de las cuales 10 eran con una supuesta banda de extorsión en Casillas, 22 órdenes para San Rafael Las Flores y Mataquescuintla, una para Roberto González de Santa María Xalapán. Del total, 5 eran para San Rafael Las Flores. 7 de 22 fueron capturados y guardaron prisión hasta noviembre 2013. En total hubo 53 órdenes de allanamiento, 35 de estas en San Rafael Las Flores. Los allanamientos eran, según las órdenes militares, para buscar los explosivos robados.

⁵³ <https://tahoeontrial.files.wordpress.com/2015/04/affadavit-wiretap-transcripts-filed-23jan15.pdf>

En las escuchas, hay varias conversaciones que Rotondo sostuvo con Juan Pablo Oliva Trejo, durante los hechos del 27 de abril de 2013, en donde le da órdenes de disparar a matar a los manifestantes. Oliva Trejo se desempeñaba como asesor en comunicaciones y seguridad de Minerasa. Como consecuencia, Rotondo fue capturado el 30 de abril de 2013 y Oliva Trejo, el 4 de mayo de 2013. Oliva Trejo estuvo de alta en el ejército hasta 2005. Tiene el grado de subteniente de Infantería, logrado en 2000. Su nombre cobró más notoriedad por ser el representante legal de Counter Risk, S.A., una empresa creada en 2008 y contratada por Tahoe Resources para hacer una consultoría de riesgo y seguimientos a publicaciones de prensa. Parte de esta información también aparece en la demanda legal de los siete comunitarios de San Rafael Las Flores, en donde se indica que “El personal de seguridad de Tahoe en la Mina Escobal estaba integrado por Rotondo y personal de seguridad privado empleado bajo contrato con las compañías de seguridad Grupo Golan (Alfa Uno) y Counter Risk, S.A.”.

El tipo de comunicación en las escuchas, denota un alto grado de confianza entre Rotondo y Oliva Trejo. Un nivel de confianza que también existía con el padre de Oliva Trejo, el coronel retirado Juan Guillermo Oliva Carrera, presidente y director de la Asociación de Estudios Políticos Militares (AEPM),⁵⁴ procesado judicialmente por ser uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, ocurrido en septiembre de 1990.

La AEPM es sede de las empresas: Counter Risk, S.A., de la que Oliva Trejo es el representante legal, y de Supervivencia Urbana, S.A., en la cual Oliva Carrera es director de análisis de riesgo político y Oliva Trejo instructor de tiro.⁵⁵ Supervivencia Urbana es un polígono de tiro, conocido como Polígonos de Tiro del Sur, que dirige el general Alfredo Augusto Rabbé Tejada, diputado electo por la UCN pero después de tomar posesión se declaró independiente. Rabbé Tejada es uno de los socios de la empresa Mayaquímicos, S.A. (MAQUISA), la empresa citada párrafos arriba creada por el Instituto de Previsión Militar (IPM), encargada de suministros de explosivos a Minerasa para sus operaciones mineras, y dueña de los explosivos que supuestamente fueron robados, una de las causas que el gobierno adujo para instaurar el Estado de Sitio, el 2 mayo de 2013.

5.10 Cambios en la seguridad privada de Minerasa

Luego de los sucesos del 27 de abril de 2013 y la captura de Alberto Rotondo, Tahoe Resources decidió cambiar la empresa de seguridad privada. Para ello recurrió a una nueva empresa de seguridad para salvaguardar sus intereses: Centurion Security, S.A., inscrita en el Registro Mercantil en 2013 y que recibió sus licencias para operar como empresa de seguridad privada, en el primer semestre de 2014.

Lo dijo Donald Paul Gray, vicepresidente de Tahoe Resources, en su declaración jurada: “A principios de 2013, Minerasa contrató a Peter Snell para asesorar sobre asuntos de seguridad. Snell era el gerente general de la compañía de seguridad Yantarni. Para ese momento, Snell se encontraba en el proceso de formar la empresa Centurion Security S.A. (Centurion), una nueva compañía de seguridad que proporcionaría servicios de protección a las instalaciones.”⁵⁶

Gray indica que por sus tratos con Centurion y su trabajo en Guatemala, y tras reconocer que era una empresa legalmente registrada e inscrita en Guatemala, fue contratada. “En junio de 2013 Centurion fue contratada para manejar el contrato del Grupo Golan. En abril de 2014, Minerasa terminó su contrato con el Grupo Golan y retuvo a Centurion para proporcionar servicios completos de protección a la mina Escobal.” Actualmente, Centurion escolta entre 8 y 10 camiones que cargan el mineral durante las noches, prestándoles seguridad durante todo el recorrido hasta Puerto Quetzal, en el departamento de Escuintla.

⁵⁴ <http://asociacionepm.org/>

⁵⁵ Oliva Trejo es presidente de la ONG “Por los niños”, con sede en la colonia militar Lourdes.

⁵⁶ <https://tahoeontrial.files.wordpress.com/2015/04/affadavit-donald-paul-gray-24nov14.pdf>

Pobladores entrevistados indican que la seguridad pública se incrementa durante esas horas a lo largo del recorrido.

En el caso de la compañía de seguridad privada Corporación Yantarni, S.A., esta fue fundada en Guatemala por militares británicos, el 5 de junio de 2006. Sus inicios fueron para brindar seguridad privada a la empresa de importación y distribución de combustibles, Blue Oil, S.A., inscrita en Guatemala el 19 de diciembre de 2005.⁵⁷

De acuerdo con Snell, Yantarni es una compañía británica “que ofrece asesoría en cada aspecto de seguridad, desde operaciones corporativas, riesgo comercial e inversión extranjera hasta apoyo contra terrorismo y espionaje a los gobiernos de la región.” Yantarni es una empresa recomendada por la Embajada de Gran Bretaña en Guatemala.⁵⁸

6.0 Consideraciones finales

El caso del proyecto minero Escobal se ha convertido en uno de los casos emblemáticos de criminalización de la protesta social y limitaciones a la libertad de asociación y protesta pacífica por las siguientes razones:

- La oposición pacífica al proyecto minero Escobal se extendió a varios municipios de los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, los cuales contienen parcial o totalmente las licencias mineras de la transnacional canadiense-estadounidense Tahoe Resources y su subsidiaria Minera San Rafael (Minerasa).
- Las consultas comunitarias de buena fe organizadas para pronunciarse pacíficamente contra la explotación minera, fueron el mecanismo legal preferido que la población encontró para manifestar su desacuerdo con ese proyecto.
- La respuesta del gobierno y de la empresa minera fue no aceptar la oposición comunitaria. En cambio, de manera articulada, emprendieron acciones dirigidas a desarticular el movimiento comunitario de oposición al proyecto minero. Influyó sobremanera en esta reacción gubernamental, el potencial económico del proyecto minero y la consideración de la seguridad privada de la minera que San Rafael Las Flores corría el riesgo de convertirse en otra “Puya”, en referencia al proyecto minero en el municipio de San José El Golfo, Guatemala, que para esas fechas se mantenía interrumpido por la resistencia pacífica ejercida por la población.⁵⁹
- Estas acciones iban desde facilitar relaciones con comunidades y liderazgos organizados por medio de finqueros vinculados al proyecto minero para tratar de convencerles de las bondades del proyecto, hasta procesos de carácter militar contrainsurgente, para aplacar y/o dismantelar presuntas amenazas para la continuidad de su proyecto.
- La empresa minera contrató agencias de seguridad privada locales y extranjeras que se encargaron de planificar la seguridad del proyecto minero y acciones de “control” de la movilización social contra la mina, como criminalización y represión de los movimientos comunitarios y de los liderazgos que para la empresa minera representaban amenaza a sus intereses.
- Se observó un proceso donde instancias gubernamentales encargadas de la seguridad pública gestaron relaciones estrechas con el proyecto minero y su seguridad privada, que alcanzaron su momento pico

⁵⁷ Argueta, Otto (2010), *Private Security in Guatemala: The Pathway to Its Proliferation*. Pág. 93. NOMOS. Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2013. Printed in Germany. Edition 2013. 296 páginas.

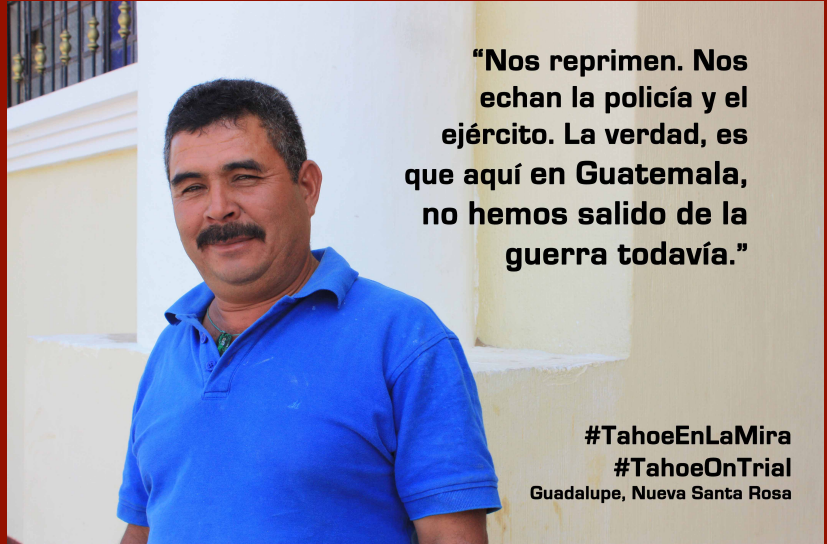
⁵⁸ <http://pmcjournal.com/wp-content/uploads/docs/ALLPMCSLIST.pdf>

⁵⁹ <http://www.plazapublica.com.gt/content/el-pico-del-conflicto-minero>

durante el Estado de Sitio de mayo de 2013 y que se ha sostenido a través de la instalación del Grupo Interinstitucional en San Rafael Las Flores y la permanencia de dos destacamentos militares en la zona. En esta fase se observó la articulación de la demanda de intervención de la empresa minera al Estado, y la respuesta sistemática del gobierno por medio del Ejército, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). El respaldo de la Presidencia de la República al proyecto minero quedó plenamente demostrado dos meses después de que se declarara el Estado de Sitio.⁶⁰

- El Estado de Sitio logró menguar la fuerza del movimiento anti minero mediante estrategias como el terror (vía persecución militar y policial), la criminalización y judicialización de los liderazgos, capturas a partir de falsas acusaciones y cateos masivos a viviendas de personas clave del movimiento opositor.
- Si estas condiciones no cambian, la resistencia anti minería, en la práctica, recibirá un tratamiento que irá desde considerársele una amenaza controlable, hasta su identificación como “amenaza terrorista”; esto ha implicado una respuesta de tipo contrainsurgente con planes específicos para desarticularla. En este escenario, es previsible la continuación de la participación de agentes de seguridad privada extranjera e instancias militares del Ejército vinculadas a estructuras de inteligencia militar.
- Los procesos de criminalización y judicialización de decenas de comunitarios y comunitarias nunca contaron con pruebas reales. Hubo decenas de detenciones. Los detenidos pasaron horas, hasta meses, en prisión; sin que se probara ninguno de los delitos por los que se les detuvo. Estas detenciones arbitrarias tuvieron más un carácter de castigo con el propósito de desactivar la protesta anti minera.

⁶⁰ <http://nisqua.blogspot.com/2015/09/crumbling-political-support-for-tahoe.html>



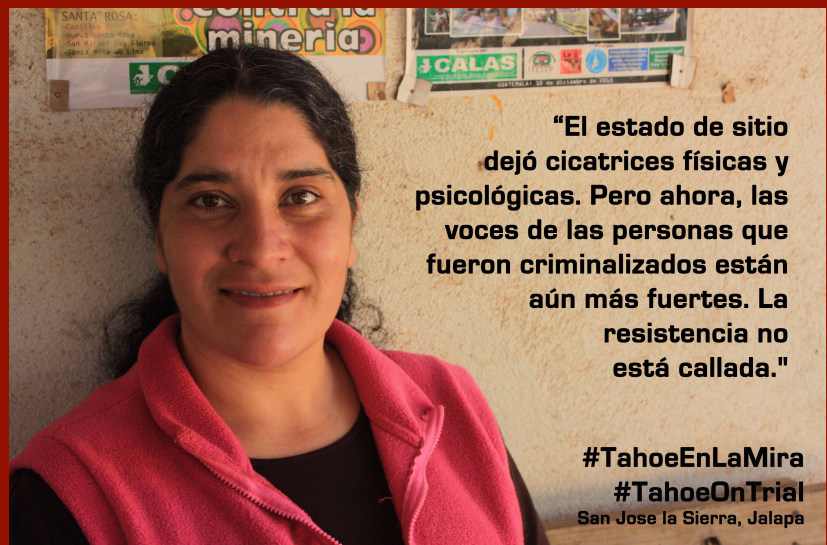
"Nos reprimen. Nos echan la policía y el ejército. La verdad, es que aquí en Guatemala, no hemos salido de la guerra todavía."

**#TahoeEnLaMira
#TahoeOnTrial
Guadalupe, Nueva Santa Rosa**



#TahoeEnLaMira #TahoeOnTrial
Mataquescuintla, Jalapa

"Estamos manifestando nuestros derechos y queremos ser escuchados. Lo hacemos en el libre derecho que tenemos como pueblos y comunidades que están siendo afectadas."



"El estado de sitio dejó cicatrices físicas y psicológicas. Pero ahora, las voces de las personas que fueron criminalizados están aún más fuertes. La resistencia no está callada."

**#TahoeEnLaMira
#TahoeOnTrial
San Jose la Sierra, Jalapa**